



PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

## RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México a, 29 de noviembre de 2023.

Visto los autos del expediente identificado al rubro, formado con motivo de la orden de verificación extraordinaria a la estación de servicio con número de permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio **PL/8017/EXP/ES/2015**, denominada **PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**, con domicilio en **AV. LAZARO CARDENAS NO. 904, LAZARO CARDENAS, 87030, VICTORIA, TAMAULIPAS**, se procede a dictar la presente resolución en los siguientes términos y;

### RESULTANDOS:

**PRIMERO. Orden de Verificación Extraordinaria.** En cumplimiento a la orden de verificación extraordinaria emitida en fecha **2 de julio de 2023**, por la **Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles** adscrita a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles perteneciente a la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor, personal adscrito a dicha Dirección General, en fecha **12 de julio de 2023**, se constituyó en el domicilio de la estación de servicio de referencia, a efecto de verificar el debido cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Infraestructura de la Calidad y Normas Oficiales Mexicanas: NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación y NOM-185-SCFI-2017, Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

Por lo que una vez corroborado el domicilio de la estación de servicio sujeta a verificación, se procedió a levantar el acta circunstanciada de visita de verificación respectiva, misma que obra en autos.

**SEGUNDO. Inicio de Procedimiento por infracciones a la Ley.** Por acuerdo de **4 de agosto de 2023** se ordenó notificar el acuerdo de inicio a procedimiento a dicha estación de servicio, para que dentro del plazo de Ley y bajo apercibimiento, ofreciera pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, además se le realizaron los siguientes requerimientos: a) documentos idóneos que acreditaran su condición económica actual; b) señalara domicilio físico o correo electrónico para oír y recibir notificaciones; c) acreditara la personalidad para intervenir en el presente asunto; notificación que se le realizó en fecha **10 de octubre de 2023**, como obra en autos.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

**TERCERO.- Preclusión de manifestaciones y pruebas.** Transcurrido el término previsto en el primer párrafo del artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por acuerdo de fecha **30 de octubre de 2023**, se tuvo por concluido el periodo de manifestaciones y ofrecimiento de pruebas, sin que se recibiera en dicho plazo escrito alguno por parte de la estación de servicio en el que se ofrecieran pruebas y/o manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, el acuerdo de mérito que fue notificado **por estrados** en fecha **31 de octubre de 2023**.

**CUARTO. Apertura de Periodo de Alegatos.** Por acuerdo de fecha **31 de octubre de 2023**, se concedió un término de dos días hábiles para que la citada estación de servicio formulara alegatos con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 123 de la Ley de la materia; sin que se recibiera en dicho plazo, escrito alguno por parte de la estación de servicio, el proveído de mérito fue notificado **por estrados** en fecha **1 de noviembre de 2023**.

Agotado en sus términos el procedimiento administrativo en todos sus trámites, se procede a emitir resolución, conforme a los elementos de convicción con que cuenta esta autoridad, y;

## CONSIDERANDOS

### PRIMERO. COMPETENCIA

Esta Dirección de Procedimientos adscrita a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, perteneciente a la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor, es competente para conocer y resolver del presente asunto atento a lo dispuesto en los artículos 1° y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, fracciones I, II, XIX, 27, fracciones I, II, III, VIII, IX y X y 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1°, 3°, 4°, párrafos primero fracciones III y XV, párrafos segundo y tercero, 18, párrafos primero, segundo fracciones IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII y párrafo tercero, 19, 27, fracciones V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XV y XVI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; de conformidad con el numeral **QUINTO** tercer párrafo del **"Acuerdo por el que se Delegan a Diversos Servidores Públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, las Facultades que se Indican"** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021, 1°, 4° y 7° fracción II inciso A) y 12 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor (vigentes).

### SEGUNDO. ESTUDIO DE PROCEDENCIA

1. De las constancias que obran en el expediente, se advierte esencialmente que, en cumplimiento de la orden de visita de verificación extraordinaria que fue emitida por la **Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles** adscrita a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles perteneciente a la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor a la estación





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

de servicio **PL/8017/EXP/ES/2015**, denominada **PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**, personal adscrito a esta Procuraduría, llevó a cabo tal visita, levantando para ese efecto, acta circunstanciada de visita de verificación.

2. Con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los siguientes ordenamientos: Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Infraestructura de la Calidad, así como de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, en adelante únicamente (NOM-005-SCFI-2017), y la Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2017 Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación; en adelante únicamente (NOM-185-SCFI-2017), de la verificación visual y de aspectos metrológicos y mecánicos, se detectó lo siguiente:

- **NO CUMPLIO CON LA PRUEBA DE BITÁCORA DE EVENTOS**

Toda vez que **CUATRO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, con número de serie 87939D, lados "A", "B", "C" y "D",** presentaron las siguientes irregularidades:

a) **No cumplen lo referente a la bitácora de eventos de acceso al modo de programación, respecto a las hojas de control presentadas del instrumento**, debido a que el personal comisionado, asentó lo siguiente: "Los registros de acceso al modo de programación de la bitácora de eventos (**ACMO**), no corresponden con hojas de control que al efecto se lleven", transgrediendo con ello lo dispuesto en el punto 7.2.5.5 de la NOM-185-SCFI-2017, y el punto 10.2.2.4.14 de la NOM-005-SCFI-2017.

Lo anterior tiene sustento en los siguientes puntos:

**NOM-005-SCFI-2017**

**10.2.2.4.14 Pistas de auditoría o bitácora de eventos.**

*La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o Micro USB), conforme a las instrucciones del fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría para poder realizar las verificaciones correspondientes. - El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría la tabla en donde se indique a qué evento corresponde. - Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:*





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Descripción	Verificar
CALI	Los registros de ajuste deben estar documentados con dictámenes de verificación expedidos por unidad de verificación acreditada y aprobada o la Procuraduría.
CAMP	Los registros del cambio de precio deben coincidir con la información proporcionada a la autoridad competente.
APPU	Los registros de la apertura de puerta deben coincidir con la información señalada en hojas de control que al efecto se lleven.
ACMO	Los registros de acceso al modo de programación y las acciones realizadas (actividades, comandos y rutinas) deben coincidir con la información señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.
CAMF	Registro del cambio de fecha y hora del sistema incluyendo la nueva fecha y hora, debe coincidir con la información señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.
ACTU	Registro de actualización del o los programas del sistema incluyendo la versión a la que se actualizó, debe coincidir con la información señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.

NOM-185-SCFI-2017

7.2.5.5 El registro de los accesos al modo de programación, deben coincidir con la información señalada en las hojas de control que al efecto se lleven en la estación de servicio.

3. En consecuencia, con fundamento en los artículos 25 Bis fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 3°, primer párrafo, fracción XI, 127 y 147, primer párrafo, fracción I de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se procedió a la aplicación de la medida de inmovilización a los **CUATRO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN** de referencia, con la finalidad de salvaguardar los intereses y derechos del consumidor.

Preceptos que se insertan para mayor proveer:

Ley Federal de protección al Consumidor

"Artículo 25 BIS. - La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;  
(...)"

Ley de Infraestructura de la Calidad

"Artículo 3. Las Autoridades Normalizadoras están obligadas a procurar políticas públicas que contribuyan a la modernización del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a impulsar una adecuada infraestructura de la calidad que permita estimular el crecimiento de la industria, así como a la consecución de los diversos objetivos legítimos de interés público previstos en esta Ley. Además de las facultades expresamente conferidas en la presente Ley y en su Reglamento, las Autoridades Normalizadoras cuentan con las siguientes atribuciones:

(...)  
XI. Ordenar la suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización, así como establecer las medidas tendientes a proteger a los consumidores o usuarios finales de aquellos bienes, productos y servicios respecto de los cuales se hayan detectado incumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas, como resultado de una Verificación, de conformidad con los artículos 146 y 147 de la presente Ley;  
(...)"





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

60

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

*"Artículo 127. Los instrumentos para medir sujetos a control metrológico legal que no cumplan con los requisitos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de metrología legal serán inmovilizados por la autoridad competente antes de su venta o uso, o durante su uso hasta en tanto los satisfagan. Aquellos instrumentos para medir que no puedan acondicionarse para atiendan esos requisitos serán inmovilizados por la autoridad competente para impedir su uso."*

*"Artículo 147. Si del acto de Verificación se desprende determinada deficiencia, se procederá de la siguiente manera:*

*I. Si se trata de incumplimiento de especificaciones fijadas en Normas Oficiales Mexicanas o Estándares obligatorios, la autoridad competente prohibirá de inmediato su comercialización, inmovilizando los bienes, hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o sustituyan. Si por la naturaleza del bien no es posible, se tomarán las providencias necesarias para que no se usen o presten para el fin a que se destinarían de cumplir dichas especificaciones. (...)"*

4. Por otra parte, con fundamento en el artículo 67, fracción VIII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el personal actuante, al final de la visita de verificación, otorgó el uso de la palabra a la persona que atendió ésta, quien asentó de puño y letra: **"Nada que manifestar"** (Nombre y rúbrica).

### TERCERO. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES RESPECTO A LA ORDEN DE VERIFICACIÓN

1. Resulta para esta Autoridad Administrativa Federal, que la **orden de verificación extraordinaria** cumplió con todos y cada uno de los elementos y requisitos especificados en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que el contenido de la orden de verificación extraordinaria resulta acorde a los mismos, pues es en el artículo 16 constitucional, donde se impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, ***esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado***, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad<sup>1</sup>, lo que se traduce a su vez, en el principio de legalidad.

En ese sentido se deja claro que, respecto a la fundamentación y motivación, deben tenerse presentes las siguientes directrices:

- a) Que la autoridad que emite el acto, actúe dentro de las atribuciones que constitucionalmente tiene conferidas, y;
- b) Que el cuerpo normativo, se refiera a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas de manera motivada.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Común, con el número de Tesis: 1a./J. 139/2005, página 162, del rubro y texto siguientes: **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.**

<sup>2</sup>Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis I.7o.A.12 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Libro VI, Marzo de 2012, Décima Época, Materia Constitucional, página 1134, de rubro siguiente: **ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY**





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

A mayor abundamiento, conviene acotar que los citados artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 3º, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, disponen a la letra:

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*

*"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

*...*

*Ley Federal de Procedimiento Administrativo*

*"Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:*

*...*

*V. Estar fundado y motivado;*

2. Como se puede observar, el primero de los numerales preinsertos encierra los principios de legalidad y seguridad jurídica, a los que deben sujetarse en general los actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de los particulares, entendido esto, como la obligación que conste por escrito, que señalen la autoridad que los emite, estén debidamente fundados y motivados; expresen la resolución, objeto o propósito de que se trate y sean expedidos por autoridad competente.

Esa misma idea, es adoptada por el segundo precepto en mención, respecto de los actos administrativos, específicamente en los que es necesario expresar el dispositivo acuerdo o decreto que legitime la actuación de la autoridad para que el afectado esté en aptitud de conocer si se encuentra o no dentro de sus atribuciones.

3. Así, el derecho fundamental consistente en otorgar garantías procesales (**fundamentación**) de un acto de autoridad sólo alcanza su plena justificación, cuando al emitirse se invocan en su propio texto con toda exactitud, claridad y detalle, las normas legales exactamente aplicables al caso concreto. En tanto que el de **motivación**, presume el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, es decir, los razonamientos lógico-jurídicos que se consideraron para la emisión del acto; tal y como aconteció en la especie; además, de autos se desprende que dicha **orden de verificación extraordinaria** cumplió con todos y cada uno de los elementos y requisitos **del acto administrativo** especificados por citado artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior, resulta primordial a dilucidar dichos elementos de los cuales se da cuenta enseguida:

---

RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE MARZO DE 2011).





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

- a) Consta por escrito, tal y como se acredita con la documental que obra en autos a fojas 1 a 6 del expediente.
- a) Fue expedida por el Director de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, ejerciendo su competencia material, territorial y por grado, con fundamento en los siguientes preceptos:

*"Conforme a las atribuciones otorgadas a la Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, adscrita a la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor, para vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, las de la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como de las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de combustibles líquidos, en pro de la sociedad consumidora de tales combustibles, tengo a bien ordenar lo siguiente [ ...]".*

PRIMERO.- COMPETENCIA.- La Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles es competente por RAZÓN DE MATERIA para ordenar la verificación y vigilancia de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, las de la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como de las Normas Oficiales Mexicanas, conforme a lo dispuesto por el artículo QUINTO párrafo primero y segundo del ACUERDO por el que se delegan a diversos servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, las facultades que se Indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021, en relación con los artículos 27 fracción I y VIII y IX del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2019; 1°, 3°, 7° primer párrafo, fracción II, incisos A), B) y C), del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2020, POR GRADO con fundamento en los artículos 1°, 3°, 4° párrafo primero, segundo, tercero y cuarto fracción XV y 18 párrafo primero y segundo párrafo, fracciones IV, XI, XII, XIV, XV, y XXVII del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2019, conforme a lo dispuesto por el artículo QUINTO párrafo primero y segundo del ACUERDO por el que se delegan a diversos servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, las facultades que se Indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021; Resulta competente dentro del ÁMBITO TERRITORIAL de competencia, es decir en TODO TERRITORIO NACIONAL, para ordenar visitas de verificación en la materia aquí descrita, conforme a lo señalado en el artículo 19 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2019, Ello, en concordancia con los artículos 1°, 3° y 12 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2020.

- b) Se indicó en ésta el objeto y alcance de la visita, tal y como se transcribe a continuación:

**1. OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.-** Verificar y vigilar que la estación de servicio, cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Infraestructura de la Calidad y Normas Oficiales Mexicanas aplicables, esto es: la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento del combustible y servicios considerados peligrosos; la adecuada utilización de los datos aportados por el consumidor en transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas; vigilar y verificar que se respeten los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo; que se respeten los precios, tarifas, cantidades, calidades y demás condiciones pactadas; exhibir a la vista del público la tarifa de los principales servicios y productos que ofrece y las tarifas de los demás, en todo caso, deberán estar disponibles al consumidor; que el producto que se ofrece al público no se niegue o condicione al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad, además el proveedor no podrá establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares; que los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, se expresen en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida;





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

que el personal encargado directamente de la comercialización expida los comprobantes, facturas o recibos donde consten los datos específicos de las operaciones, se respete la información comercial; que se entregue la cantidad ofrecida, se respeten las condiciones y términos en que se ofrece el producto; que no se apliquen métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios, así como tampoco prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente por el consumidor; que los instrumentos para medir utilizados directamente o en el proceso para materializar las transacciones comerciales, cuenten con la verificación conforme a la **"Lista de instrumentos de medición, cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla"**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto del 2020, así como; realizar la revisión física y solicitar los planos o instructivos o demás documentos que prueben que realizan la medición exacta, correcta y segura del producto que se comercializa; las funciones o movimientos de la consola o equipo de control remoto que se encuentra en el establecimiento; que las condiciones bajo las cuales opera el establecimiento y los instrumentos para medir, no impliquen riesgos para la vida o la salud de los consumidores.

Además de ello, la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2018, de acuerdo con la competencia definida en sus numerales 10 y 13; verificando las características metroológicas, especificaciones, información comercial de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, así como la constatación de los aspectos relacionados a la verificación inicial, periódica y extraordinaria y; en su caso, lo correspondiente a la verificación de los medidores de alto flujo; lo anterior con fundamento en los puntos 10, 10.1 verificación por autoridad competente; 10.1.2 Verificación visual; 10.1.2.1 dispositivo computador; 10.1.2.2 caratula indicadora; 10.1.2.3 mecanismo de ajuste; 10.1.2.4 dispositivos de despacho; 10.1.2.4.1 manguera de descarga; 10.1.3 verificación de cualidades metroológicas; 10.1.3.1, 10.1.3.2, 10.1.3.3 prueba a gasto volumétrico máximo; 10.1.3.4 prueba a gasto volumétrico medio; 10.1.3.5 prueba gasto volumétrico mínimo; 10.1.4 número de pruebas 10.1.5 errores máximos tolerados; 10.1.6, 10.1.7 gastos volumétricos en las pruebas; 10.1.8, 10.2 verificación del sistema electrónico y programas de cómputo; 10.2.1, 10.2.2, 10.2.2.1, 10.2.2.2 10.2.2.3, 10.2.2.4 procedimiento de verificación electrónica 10.2.2.4.1, 10.2.2.4.2, 10.2.2.4.3, 10.2.2.4.4, 10.2.2.4.5 revisión del pulsador; 10.2.2.4.6 revisión del sistema electrónico; 10.2.2.4.7, 10.2.2.4.8 prueba de retención de información en pantallas; 10.2.2.4.9, 10.2.2.4.10, 10.2.2.4.11, 10.2.2.4.12, 10.2.2.4.13 validación, verificación y aprobación de los programas de cómputo 10.2.2.4.14 bitácora de eventos (en estricto apego al artículo séptimo transitorio adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2019); 10.2.2.4.15, en concordancia y cumplimiento con los incisos 5.1.1, 5.1.1 fracción b, 5.2 5.3.1, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.6, 5.3.3, 5.3.4.1, 5.3.5.1, 5.3.5.2, 5.3.5.4, 5.3.5.5, 5.3.6, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.5.1, 7.2.5.2, 7.2.5.3, 7.3.1, 7.3.1.2.3, 7.3.1.2.3.1 y 9.3.4, de la **NOM-005-SCFI-2017**, así como de la norma Oficial Mexicana **NOM-185-SCFI-2017**, Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2018; de acuerdo con la competencia definida en su numeral 9; verificando en campo la seguridad, protección e idoneidad de los programas informáticos (software), de los sistemas para medición y despacho de gasolina que cuentan con la aprobación del modelo o prototipo, que se utilizan y comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior con fundamento en los puntos 7, 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.2, 7.2.2.1, 7.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.4, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3, 7.2.5, 7.2.5.1, 7.2.5.2, 7.2.5.2.1, 7.2.5.2.2, 7.2.5.3, 7.2.5.4, 7.2.5.5, 7.2.6, 7.2.6.1 en concordancia y cumplimiento con los incisos 5.1.2.9, 5.1.2.11, 5.1.2.12, 5.1.2.13, 5.1.2.14, 5.1.2.15, 5.1.2.16, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.2, 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.8.1, 5.3.8.3, 5.5.2, 5.5.7.1, 5.5.7.2, 5.7.5.1, 5.7.5.2, 5.9.2, 5.9.7.1, 5.9.7.2, 5.14.5.1, 5.14.6.2, 5.14.6.5 y 5.20.3, 5.20.4, 5.23.3.2.

En ese tenor, se hace del conocimiento que, si durante la visita de verificación, se requiera efectuar toma de muestras para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el personal comisionado, deberá acatar lo indicado en el artículo 97 ter del citado ordenamiento, esto es; recabar por triplicado las muestras, una para el análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor, otra quedará en poder del visitado para su análisis particular, y la tercera tendrá el carácter de muestra testigo, quedando en resguardo del establecimiento visitado y a disposición de la Procuraduría, otorgándose el recibo correspondiente.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Es aplicable al respecto, la siguiente tesis jurisprudencial 2a./J.176/2011 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia Administrativa, Página 3544, de rubro y texto siguientes:

*"ORDEN DE VERIFICACIÓN. SI SE PRECISA CLARAMENTE SU OBJETO, LA CITA DE DIVERSOS ARTÍCULOS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES A VERIFICAR NO LA VUELVE GENÉRICA. La autoridad verificadora debe expresar clara y exhaustivamente en la orden respectiva los aspectos a revisar, lo cual se satisface cuando ésta es puntual en la enumeración y descripción de los rubros que constituirán la materia de la verificación correspondiente, evitando afirmaciones genéricas o abstractas que impidan conocer al gobernado las obligaciones exactas que le serán verificadas; por ello, es intrascendente que algunos numerales que se citen se refieran a aspectos y actividades diferentes, pues evidentemente, lo que circunscribe la actuación de la autoridad verificadora es la anotación relativa al objeto de la orden de verificación, y no el listado de preceptos legales en que se apoye; luego, la inclusión de aquellos que no tengan relación con los aspectos especificados en el rubro relativo al objeto de la verificación no vuelve genérica la orden respectiva, pues al llevar a efecto las diligencias de verificación, la autoridad deberá ajustarse a los aspectos y actividades expresamente señalados en el apartado concerniente al objeto, sin que ello la exima de verificar que éste encuentre apoyo exacto en las normas invocadas como fundamento. Además, la autoridad no puede ejecutar actos diversos al objeto determinado en la orden, aunque se encuentren contemplados en los preceptos citados como fundamento, pues ello vulneraría la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

- c) Fue emitida por la Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles adscrita a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de esta Procuraduría.
- d) Ostenta la firma autógrafa cuyo funcionario la emitió siendo el Director de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles adscrito a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor.
- e) Se expidió sujetándose a las formalidades exigidas por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley de Infraestructura de la Calidad.
- f) Se expidió sin que mediara error sobre el objeto de la visita de verificación.
- g) Se señalaron los nombres de las personas a las que fue dirigida la orden de verificación, siendo en el caso en concreto al propietario y/o responsable y/o representante y/o encargado y/o empleado de la estación de servicio **PL/8017/EXP/ES/2015**, denominada **PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**,
- h) Se señaló la fecha y lugar de expedición, siendo ésta en la **Ciudad de México**, el **2 de julio de 2023**.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

- i) Está fundada y motivada, puesto que del cuerpo de la orden de inspección se desprenden los motivos que originaron su emisión, así como los fundamentos que le dan fuerza legal, tal y como ha quedado descrito.

En complemento a lo anterior, se citaron los preceptos legales aplicables al caso concreto; ello es así, ya que de dicha actuación, se advierte lo siguiente:

*"En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1°, párrafo tercero, 16, y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 7° Bis, 8°, 9°, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 24 fracciones I, II, XIII, XIV, XIV bis, XVI, XVII, XIX y XX, 25, 25 Bis fracciones I y III, 27 fracciones III, VIII, IX y X, 34, 42, 57, 58, 94, 96, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quater, 98 fracciones I, II, III y V de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones II, VI y VII 13, 14 fracciones I y II, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 76, 77, 81, 82 y 83 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2019; 1°, 3° primer párrafo fracción X y XI, 6°, 9°, 10, 12 primer y segundo párrafo 62, 64, 69 párrafo séptimo, 97, 117, 118 párrafo segundo, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147 párrafo primero y segundo, fracción I, y 148 de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 1, 2, 3, 13, 14, 16 fracciones II y IX, 28, 30, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo [...]."*

Robustece lo anterior, la siguiente tesis aislada I.3o.C.52 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, Página 1050, de rubro y texto siguientes:

**"ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.**  
De lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cual autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora este habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento".

#### CUARTO. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES RESPECTO AL ACTA DE VERIFICACIÓN

Del estudio que se realiza del acta circunstanciada de visita de verificación se advierte por esta autoridad que el personal verificador adscrito a esta Procuraduría, actuó con estricto apego a lo





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

establecido en el artículo 67<sup>3</sup> de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 143 de la Ley de infraestructura de la Calidad respecto a la verificación que nos ocupa, ya que del contenido de dicha acta se advierte que contiene lo siguiente:

- a) El nombre, denominación o razón social del visitado: la estación de servicio **PL/8017/EXP/ES/2015**, denominada **PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**, visible a foja 1 del acta de verificación en comento.
- b) La hora en que inició la diligencia fue a las **17:56 horas** del **12 de julio de 2023**, culminando la misma a las **21:10 horas** del mismo día.
- c) El domicilio del lugar en que se practicó la visita, siendo éste el ubicado en: **AV. LAZARO CARDENAS NO. 904, LAZARO CARDENAS, 87030, VICTORIA, TAMAULIPAS.**
- d) Se señaló el número de la orden que motivó la visita de inspección: **PFC.C.B.1.12/006232-2023**, de fecha **2 de julio de 2023**.
- e) La persona con la cual se llevó a cabo la diligencia quedó debidamente identificada en el acta, así también fue asentado su cargo en la estación de servicio.
- f) Los testigos quienes quedaron debidamente identificados, tal como se advierte en el acta de verificación y, que en el presente caso fueron designados por el **VISITADO**.
- g) Se hicieron constar detalladamente los hechos detectados durante la visita de verificación.
- h) Por último se asentaron los nombres y las firmas de quienes participaron en la visita de inspección.

## QUINTO. ESTUDIO DE FONDO

1. Como se desprende de autos, en contra de la visita de inspección, el visitado **omitió formular manifestaciones**, pues la persona con quien se llevó a cabo la diligencia de **inspección no señaló observaciones al momento del acto**, en términos del artículo **67 fracción VIII** de la Ley

<sup>3</sup>Artículo 67.- En las actas se hará constar:

- I. Nombre, denominación o razón social del visitado;
- II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
- III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;
- IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;
- V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
- VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
- VII. Datos relativos a la actuación;
- VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y
- IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección al Consumidor en términos de su arábigo 124 BIS.

2. Por otra parte, en términos de lo establecido en la última parte del artículo **68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo**, la visitada no presentó escrito de observaciones y pruebas respecto del acta circunstanciada de visita de verificación.

3. En cuanto al plazo otorgado para ofrecer pruebas y manifestar en lo que a su derecho conviniera, en términos del artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, **la estación de servicio visitada no presentó escrito de manifestaciones y tampoco ofreció pruebas.**

En virtud de que la inspeccionada no realizó manifestaciones y tampoco aportó pruebas que controviertan la legalidad de la orden de verificación extraordinaria ni del acta circunstanciada de visita de verificación en el presente procedimiento, en el entendido que los defensores de la confianza adscritos a esta Procuraduría Federal se constituyeron en el domicilio de la estación de servicio de alusión con el fin de dar cumplimiento a la orden de verificación extraordinaria, corroborando lo asentado por los mismos en el acta circunstanciada referida, en la medida en que fueron detectadas las irregularidades respectivas; por lo que se le debe conceder plena validez al contenido del acta circunstanciada así como la orden de verificación antes aludidas ya que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos por los artículos 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 143 de la Ley de la infraestructura de la Calidad; así como el artículo 16 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respectivamente.

4. Por lo tanto como se ha demostrado con los hechos y resultados debidamente circunstanciados en el cuerpo de la presente resolución, razonamientos precisados y constancias que integran el expediente en que se actúa, se concluye que la estación de servicio visitada expedía carburante de forma irregular con **CUATRO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, con número de serie 87939D, lados "A" ,"B" "C" y "D", no cumplen lo referente a la bitácora de eventos de acceso al modo de programación, respecto a las hojas de control presentadas del instrumento**, debido a que el personal comisionado, asentó lo siguiente: "Los registros de acceso al modo de programación de la bitácora de eventos (**ACMO**), no corresponden con hojas de control que al efecto se lleven", transgrediendo con ello lo dispuesto en el punto 7.2.5.5 de la NOM-185-SCFI-2017, y el punto 10.2.2.4.14 de la NOM-005-SCFI-2017; ergo, no cumplió con la máxima señalada en el artículo 140 de la Ley de Infraestructura de la Calidad el cual establece **el deber de los sujetos obligados de cumplir en todo momento con las Normas Oficiales Mexicanas.**





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

## SEXTO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez acreditadas la infracción y su imputación subjetiva, es decir, tanto la existencia de la falta como la responsabilidad del infractor, esta Autoridad Administrativa Federal, conforme a lo previsto en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el 89 de su Reglamento, estudiará en este momento las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

Para determinar la sanción, se debe observar y justificar, de manera fundada y motivada lo dispuesto por los artículos citados anteriormente, mismos que a la letra disponen:

*"Artículo 130.- Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de tres años, contados a partir del día en que se cometió la primera infracción, y cuyos procedimientos de infracciones a la Ley sean sustanciados en la misma unidad administrativa de la Procuraduría, dentro de su competencia territorial."*  
[Énfasis añadido]

*"Artículo 131.- Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ellas, serán impuestas indistintamente con base en:*

- I. Las actas levantadas por la autoridad;*
- II. Los datos comprobados que aporten las denuncias de los consumidores;*
- III. La publicidad o información de los proveedores y la comprobación de las infracciones; o*
- IV. Cualquier otro elemento o circunstancia que sirva como prueba para determinar el incumplimiento u omisión para aplicar la sanción.*

*Las resoluciones que emita la Procuraduría deberán estar debidamente fundadas y motivadas con arreglo a derecho, tomando en consideración los criterios establecidos en el presente ordenamiento."*  
[Énfasis añadido]

*"Artículo 132.- La Procuraduría determinará las sanciones conforme a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, considerando como base la gravedad de la infracción y tomando en cuenta los siguientes elementos:*

- I. El perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general;*
- II. El carácter intencional de la infracción;*
- III. Si se trata de reincidencia, y*
- IV. La condición económica del infractor.*

*Asimismo, la Procuraduría deberá considerar los hechos generales de la infracción a fin de tener los elementos que le permitan expresar pormenorizadamente los motivos que tenga para determinar el monto de la multa en una cuantía específica."*

[Énfasis añadido]

*"Artículo 89.- Para los efectos del artículo 132 de la Ley se entenderá que:*

*I.- Se acreditará la gravedad de una infracción cuando la conducta del infractor haya sido intencionalmente dirigida a producir consecuencias negativas, o tentativamente a querer producirlas, afectando con ellas a un consumidor o a un grupo específico y determinado de consumidores.*

*En los casos de infracciones a las disposiciones relativas a pesas, medidas y contenidos netos expresados en unidades de masa o volumen, podrá acreditarse la gravedad en función de la cantidad o porcentaje que exceda a la tolerancia permitida conforme a la norma oficial mexicana respectiva o a las disposiciones aplicables, y del detrimento o afectación que ello implique a la economía de los consumidores.*

*En su caso se tomará en consideración el monto de la reclamación respectiva.*

*II.- El perjuicio al consumidor es la afectación a sus derechos cuando se deduzca del agravio o daño ocasionado con la conducta infractora del proveedor. El perjuicio a la sociedad en general se acredita cuando los proveedores importen, produzcan, fabriquen o comercialicen productos, o presten servicios, que no cumplan con las disposiciones de la Ley y otras aplicables;*

*III.- El carácter intencional de la infracción se acredita cuando el infractor importe, produzca, fabrique o comercialice productos, o preste servicios, con conocimiento de las consecuencias patrimoniales o jurídicas derivadas del incumplimiento de las obligaciones contraídas o de las disposiciones de la Ley y demás aplicables;*





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

*IV.- Existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir del día en que se cometió la primera infracción. Para tal efecto, se considera que existe infracción cuando así haya sido establecido en resolución administrativa, y*

*V.- La condición económica consiste en evaluar las posibilidades del infractor para responder a la sanción impuesta de manera tal que sea equitativa, y será considerada con base en la información proporcionada por el proveedor y, en su caso, los datos asentados en el acta de visita de verificación.*

*Durante el procedimiento, la Procuraduría podrá solicitar la información o documentación necesaria al presunto infractor, a efecto de determinar su capacidad económica.*

*Dicha capacidad la evaluará la Procuraduría tomando en cuenta, entre otras cosas, si se trata de personas físicas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, de conformidad con la clasificación establecida por la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, así como los acuerdos emitidos por la Secretaría de Economía y, en su caso, los datos asentados."*

Como punto introductorio se precisa que, las normas bajo las cuales se realiza el estudio de individualización de la sanción (artículos 130, 132 fracciones I, II, III y IV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor así como el artículo 89 fracciones I, II, III, IV y V del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor), se encuentran apegadas a los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las mismas permiten a esta autoridad valorar los siguientes elementos:

- A) Intencionalidad;
- B) El perjuicio ocasionado al consumidor;
- C) Reincidencia;
- D) Gravedad de la Infracción; y
- E) La condición económica del infractor.

Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia, es necesario que se establezca un sistema en el que la autoridad sancionadora esté en aptitud de tomar en cuenta la gravedad de la infracción cometida, el grado de responsabilidad en la conducta omitida o prohibida, y las condiciones económicas del infractor, a fin de que pueda determinar razonablemente, en cada caso concreto, el monto de la multa que aquél amerite, atendiendo a dichas circunstancias.

Sobre esa línea el Supremo Tribunal Constitucional ha determinado que ***la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, que contraríen al artículo 22 constitucional***, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, así como la libertad de imponer las sanciones que considere justas, dentro de un mínimo y un máximo.

Por lo que debe concluirse que todas aquellas leyes o preceptos legales que concedan a las autoridades esas facultades, aunque sea implícitamente, respetan la garantía contenida en el artículo 22 de la Ley Suprema.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Amparo directo en revisión 1802/2003, Ministro Ponente José Ramón Cossío Díaz.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

65

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

A fin de imponer sanciones justas, dentro de los límites mínimo y máximo previstos en la norma, por ende la sanción resultante no se tratará de una multa fija, sino de una graduada en función de la valoración que esta autoridad administrativa realice de las circunstancias particulares de cada caso. En esa tesitura, esta autoridad estudia los siguientes elementos a fin de determinar la sanción a imponer.

#### A) INTENCIONALIDAD DE LA INFRACCIÓN

De conformidad con el artículo 89 fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el carácter intencional de la infracción se acredita cuando el infractor importe, produzca, fabrique o **comercialice productos**, o preste servicios, con conocimiento de las consecuencias patrimoniales o jurídicas derivadas del incumplimiento de las obligaciones contraídas o de las disposiciones de la Ley y demás aplicables.

Como puede advertirse del numeral transcrito, el carácter intencional de la infracción se acredita cuando el infractor comercialice productos o preste servicios con conocimiento de las consecuencias: *patrimoniales o jurídicas*, derivadas de las relaciones de consumo. Las cuales derivan como la norma lo indica del incumplimiento de las obligaciones contraídas o de las disposiciones previstas en Ley.

En este caso las obligaciones contraídas comprenden las adquiridas al solicitar el permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía, hasta las derivadas de los estándares previstos por la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales aplicables; bajo esta tesitura la intencionalidad del infractor se determina esencialmente por el conocimiento de las consecuencias derivadas del incumplimiento de la Ley.

El origen de este conocimiento comprende que todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, términos, restricciones, modalidades, y demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos, en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.<sup>5</sup>

Se considera la intencionalidad como elemento subjetivo de la conducta infractora, la cual guarda como elementos substanciales los siguientes:

- a) Forma y grado de intervención del infractor:  
***Directa al ser comercializador de gasolina y otros combustibles líquidos.***

<sup>5</sup> Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo 7.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

- b) Comisión dolosa (conocer y querer las consecuencias de acto) o culposa (falta conocimiento, intencionalidad o negligencia).

***Al comercializar gasolina y otros combustibles líquidos, con instrumento(s) previamente identificado(s) en el acta circunstanciada de visita de verificación que no cumplieron con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Infraestructura de Calidad y Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.***

***Por lo que hace a los instrumentos de medición previamente identificados cuyos registros de acceso al modo de programación de la bitácora de eventos (ACMO) no corresponden con la hoja de control que al efecto lleven.***

- c) Posibilidad de prever y evitar la conducta y el daño.

***Obligación de la estación de servicio inspeccionada, al ser comercializador de gas y otros combustibles líquidos, de prevenir el correcto funcionamiento de los dispensarios y/o instrumentos de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Infraestructura de Calidad y Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a fin de evitar el ocasionar algún daño.***

***Obligación de los permisionarios de prever el correcto funcionamiento de los dispensarios, en lo que corresponda a la prueba corresponde al acceso del modo programación.***

- d) Deber de cuidado derivado de sus propias funciones o actividades (culpa *in vigilando*).<sup>6</sup>

***La estación de servicio inspeccionada, al ser comercializador de gas y otros combustibles, tenía el deber vigilar y prever que no aconteciera o se consumara la infracción, en cumplimiento a la normatividad regulatoria del servicio de expendio de combustible líquido.***

En ese sentido se evalúa con fundamento en los elementos descritos, mismos que develan el conocimiento subjetivo del infractor sobre las posibles consecuencias patrimoniales o jurídicas emanadas del incumplimiento constatado expresamente por los defensores de la confianza de combustibles de esta autoridad.

Como puede advertirse, se trata de la comercialización de gasolina bajo estándares previstos en las leyes aplicables, así como las normas oficiales referidas, cuyo conocimiento resulta obligatorio del proveedor y se reclama la posibilidad de evitar el daño a través del correcto funcionamiento de los instrumentos y por último se trastoca el deber de cuidado derivado de sus propias funciones

<sup>6</sup> AGUIRRE Saldivar, Enrique, Individualización de las sanciones, Notas para su reflexión, Primera edición, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016, pág. 42.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

o actividades, mismo que aunque se argumente en sentido omisivo, comprende una conducta reprochable que afecta los derechos de los consumidores.

En esta tesitura, no se da pauta a un hecho cuyas consecuencias no se dimensionen, ya que el uso de instrumentos es continuo y permanente para su funcionamiento. En ese sentido resulta evidente que no se trata de fallas imperceptibles, sino continuas y perceptibles en los instrumentos de despacho de gasolina.

- **NO CUMPLIO CON LA PRUEBA DE BITÁCORA DE EVENTOS**

Tratándose de la prueba de bitácora de eventos, se precisa en el punto 10.2.2.4.14 de la NOM-005-SCFI-2017, que esta debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232, USB o Micro USB), conforme a las instrucciones del fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría para poder realizar las verificaciones correspondientes.

En esta bitácora el registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de los eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría la tabla en donde se indique a qué evento corresponde, y los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla:

Descripción	Verificar
CALI	Los registros de ajuste deben estar documentados con dictámenes de verificación expedidos por unidad de verificación acreditada y aprobada o la Procuraduría.
CAMP	Los registros del cambio de precio deben coincidir con la información proporcionada a la autoridad competente.
APPU	Los registros de la apertura de puerta deben coincidir con la información señalada en hojas de control que al efecto se lleven.
ACMO	Los registros de acceso al modo de programación y las acciones realizadas (actividades, comandos y rutinas) deben coincidir con la información señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.
CAMF	Registro del cambio de fecha y hora del sistema incluyendo la nueva fecha y hora, debe coincidir con la información señalada en las hojas de control que al efecto se lleven.

Por lo que, como puede advertirse en la bitácora de eventos deben incluirse los registros contenidos en la tabla que antecede toda vez que esta prueba guarda como principal derecho de los consumidores de gasolina y otros combustibles líquidos, la certeza de que los instrumentos de medición no sufran alteraciones posteriores a sus ajustes o calibraciones de los cuales se da cuenta mediante dictamen; es decir, los registros deben ser coincidentes con las acciones realizadas al dispensario, a fin de que estos sean comprobables y verificables.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

## B) PERJUICIO OCASIONADO AL CONSUMIDOR

La protección al consumidor goza de rango constitucional prevista en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta comprende entre otras cosas, procurar los intereses de los consumidores, derivado de que se ha definido a los mismos como un sector vulnerable, por lo que dicha protección constitucional tiene por objeto contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las partes de una relación de consumo y proveer de los medios y mecanismos para su defensa.<sup>7</sup>

Como derecho fundamental, el derecho del consumidor implica la protección de las relaciones comerciales entre particulares y se encuentra dentro del conglomerado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en este sentido es preciso señalar que uno de los elementos a considerar en la protección de los derechos de los consumidores es la importancia de la protección al consumidor frente a los riesgos de salud y su seguridad.<sup>8</sup>

Cabe destacar que la protección constitucional de los consumidores, no es en sentido limitativo sino que incluso comprende tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.<sup>9</sup> De modo que estos instrumentos, constitucionales y convencionales representan el marco de protección en materia de derechos de los consumidores, al cual se deben ajustar las actuaciones comerciales desarrolladas por las personas físicas o morales que habitual o periódicamente ofrecen, distribuyen, venden, arriendan o conceden el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.<sup>10</sup>

Expresamente el artículo 1° de la Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce los siguientes principios básicos:

- La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos; (fracción I).
- La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios (fracción II).
- La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, (fracción III).
- La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, (fracción IV).
- El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores, (fracción V).
- El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos, (fracción VI).

<sup>7</sup> Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. XCVII/2015 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación Publicación, Décima Época Fuente viernes 13 de marzo de 2015, Materia Constitucional de rubro siguiente: CONSUMIDOR. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN TIENE RANGO CONSTITUCIONAL.

<sup>8</sup> Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana/ Coordinadores Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa, Chistian Steiner; Compilación de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

<sup>9</sup> Ley Federal de Protección al Consumidor, Artículo 1° último párrafo.

<sup>10</sup> Ley Federal de Protección al Consumidor, Artículo 2° último párrafo, fracción II.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

- La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, (fracción VII).
- La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados, (fracción VIII).
- El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento, (fracción IX).
- La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, (fracción X).
- La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor. (fracción XI).

Se pone de relieve la enunciación de los derechos de los consumidores a fin de generar un punto de partida que permita vislumbrar su afectación o daño el cual constituirá un **perjuicio**, de conformidad con el artículo **89, fracción II**, del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

*"Artículo 89.- Para los efectos del artículo 132 de la Ley se entenderá que:*

*[...]*

*El perjuicio al consumidor es la afectación a sus derechos cuando se deduzca del agravio o daño ocasionado con la conducta infractora del proveedor.*

*El perjuicio a la sociedad en general se acredita cuando los proveedores importen, produzcan, fabriquen o comercialicen productos, o presten servicios, que no cumplan con las disposiciones de la Ley y otras aplicables;*

*[Énfasis añadido]*

Como puede advertirse del numeral transcrito el perjuicio al consumidor se materializa en dos dimensiones:

- a) Individual: Afectación a derechos cuando se deduzca del agravio o daño ocasionado con la conducta infractora del proveedor.
- b) Social: El perjuicio a la sociedad en general se acredita cuando los proveedores importen, produzcan, fabriquen o comercialicen productos, o presten servicios, que no cumplan con las disposiciones de la Ley y otras aplicables.

En este sentido, el perjuicio comprende una doble faceta, individual y social, que implica no sólo que los individuos no vean afectados sus derechos sino que se respeten también sus derechos como miembros de un colectivo de consumidores. Tal como se advierte de la norma estas conductas pueden tener como origen una afectación o daño a un consumidor o generar un perjuicio a la sociedad cuando se acredite la importación producción, fabricación o comercialicen productos, o presten servicios, **que no cumplan con las disposiciones de la Ley y otras aplicables.**

En el caso que nos ocupa, este perjuicio se **acredita** con el acta circunstanciada de visita de verificación en cuyo contenido se advierte las infracciones a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Infraestructura de la Calidad, así como en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Por ende esta autoridad determina el perjuicio o afectación en sentido **social** cuyos alcances materializan una afectación generalizada, constante y actualizada en tanto no se subsane la irregularidad detectada, por los verificadores de esta Procuraduría.

De esta forma, la deducción del agravio o daño ocasionado por la conducta del infractor previsto por el artículo **89 fracción II**, no comprende una determinación autónoma por parte de esta autoridad, sino se articula entre el derecho protegido, la conducta infractora y el agravio o daño causado a los intereses jurídicos, personales o patrimoniales de los consumidores.

### C) REINCIDENCIA<sup>11</sup>

De conformidad con el artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de tres años, contados a partir del día en que se cometió la primera infracción y, cuyos procedimientos por infracciones a la Ley, sean sustanciados en la misma unidad administrativa de la Procuraduría, dentro de su competencia territorial. Para tal efecto, **se considera que existe infracción cuando así haya sido establecido en resolución administrativa.**

Por lo anterior, la multicitada empresa no se encuentra en la hipótesis normativa establecida en el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que indica que en caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de las cantidades señaladas en los artículos 126, 127, 128, 128 BIS, e inclusive arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

### D) GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN

De conformidad con el artículo 89 fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor se acreditará la gravedad de una infracción, **cuando la conducta del infractor haya sido intencionalmente dirigida a producir consecuencias negativas, o tentativamente a querer producirlas, afectando con ellas a un consumidor o a un grupo específico y determinado de consumidores.**

Por su parte el artículo 128 TER, fracción V, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, considera como caso particularmente GRAVE, cuando la conducta desplegada trate de productos básicos de consumo generalizado, **como la gasolina.**

<sup>11</sup> Se considerará reincidente al infractor que, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la LFPC, incurra nuevamente en la misma conducta infractora prevista en dicho ordenamiento legal (artículo 130). Asimismo, de acuerdo con esta agravante, las tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN, 1a./J.80/2013 (10a.), en la cual se precisa que la reincidencia implica que el juzgador tome en cuenta, al individualizar la pena, que al sentenciado se le condenó con anterioridad por la comisión de un delito, pero no como un antecedente penal que revele una característica propia del sujeto activo a modo de constituir un factor para determinar su grado de culpabilidad, sino más bien, como la figura que le permite agravar la punibilidad en términos de ley. De igual manera, las tesis aisladas de Tribunales Colegiados de Circuito tesis I.18º.A.13ª. (10a.) y tesis IV.2º.P.C.2P (9a.).





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

68

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Inicialmente, quedó acreditado que **la conducta desplegada por el infractor fue dirigida a producir consecuencias negativas**, afectando con ello al público consumidor, colocándolo en un estado de indefensión al comercializar producto con instrumentos para medir que no cumplieran con las características metrológicas y de funcionamiento establecidas en la normatividad en materia de consumo, quebrantando normas de orden público e interés social y de observancia en toda la República, más si es obligación de todo proveedor conocer la legislación que debe cumplir para comercializar determinado producto, en el presente asunto de combustibles líquidos (gasolina y diésel), conforme a lo expuesto anteriormente.

Tal como se extrae, de la exposición de motivos formulada en el proceso legislativo que dio origen a dicho decreto, esta adición tiene por objeto de dotar de un parámetro de constitucionalidad a las determinaciones de esta Procuraduría sobre conductas que se estiman graves para la sociedad y a fin de que la imposición de sanciones no se estime discrecional.<sup>12</sup>

Dicha norma se encuentra investida de las características de generalidad, abstracción y permanencia, dado que se aplica a todas las personas que se colocan dentro de esa hipótesis, y no están dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, además de que su vigencia jurídica pervive después de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, situación por la que no puede considerarse que transgrede la garantía de igualdad consagrada en el numeral 13 constitucional.<sup>13</sup>

Este mismo precepto ha adoptado nuevos supuestos en función del interés social.

#### Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 128 TER Se considerarán casos particularmente graves:

- Aquellos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e intereses de un grupo de consumidores; (fracción I)
  - Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de consumidores; (fracción II)
  - Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores; (fracción III)
- (...)

<sup>12</sup> Procesos Legislativos Dictamen/Origen, México, D.F., a 12 de Febrero de 2003. "Al respecto a lo que aquí interesa se expuso lo siguiente: "Dictamen de la comisión de comercio y fomento industrial, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con objeto de superar las tesis de los diversos tribunales federales, incluso las relativas a problemas de inconstitucionalidad, y con el propósito de evitar que se estime que la Profeco tiene un amplio margen de discrecionalidad en la imposición de sanciones relevantes, se adiciona un artículo 128 quarter, que indica los casos que se considerarán particularmente graves, para efectos de sancionar con clausura de un establecimiento, misma que podrá ser hasta de 90 días, total o parcial (art. 128 bis)."

<sup>13</sup> Texto extraído de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, ad quo en este asunto Amparo en Revisión 1807/2005, Ministro Ponente: Sergio A. Valls Hernández.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

- Cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o tarifas establecidos o registrados por la Secretaría o por cualquiera otra autoridad competente; (fracción V)
  - Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente; (fracción VI)
  - La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el artículo 128 de esta ley; (fracción VII)
  - Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; (fracción VIII)
- (...)"  
[Énfasis añadido]

Como puede advertirse el legislador establece los supuestos cuya calificativa será de gravedad, y en sentido estricto, esta no está considerada por el por margen de apreciación de esta Procuraría sino por la facultad que el legislador tiene para realizar la determinación entre la afectación a los derechos de los consumidores y las infracciones.

Específicamente se prevé en el artículo 132, párrafo primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la Procuraduría determinará las sanciones considerando como base la gravedad de la infracción y tomando en cuenta los elementos de graduación referidos con anterioridad así como los hechos generales de la infracción a fin de tener los elementos que le permitan expresar pormenorizadamente los motivos que tenga para determinar el monto de la multa en una cuantía específica.

En ese sentido el artículo 89 fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que se acreditará la gravedad de una infracción, **cuando la conducta del infractor haya sido intencionalmente dirigida a producir consecuencias negativas, o tentativamente a querer producirlas, afectando con ellas a un consumidor o a un grupo específico y determinado de consumidores.**

**En los casos de infracciones a las disposiciones relativas a pesas, medidas y contenidos netos expresados en unidades de masa o volumen, podrá acreditarse la gravedad en función de la cantidad o porcentaje que exceda a la tolerancia permitida conforme a la norma oficial mexicana respectiva o a las disposiciones aplicables, y del detrimento o afectación que ello implique a la economía de los consumidores.**

Sobre esta calificación de gravedad a la infracción la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación<sup>14</sup> ha puntualizado que para determinar este parámetro deben balancearse, por un

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: I.3o.A. J/3 (10a.) publicada en la Gaceta, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, materia, Administrativa, p. 1672 del rubro: **SANCIONES IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR POR OPOSICIÓN A SUS FACULTADES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN. REGLAS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN.** De acuerdo con los artículos 13 y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la procuraduría federal especializada en esa materia, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones del propio ordenamiento, tiene la facultad de vigilar y verificar, a través de visitas, monitoreos o por cualquier otro medio, los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito, por lo que los proveedores, sus representantes o empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría Federal del Consumidor, el acceso al lugar o lugares





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

lado, **las condiciones objetivas del evento y, por otro, las subjetivas del infractor**, para determinar si aquél es mínimo, medio, máximo o intermedio entre estos parámetros, a fin de que exista correspondencia y proporcionalidad entre la calificación de la conducta y la sanción a imponer, según cada caso en particular.

De lo anterior se describen pormenorizadamente los elementos de objetivos y subjetivos que integran este elemento de sanción:

a) Elementos objetivos.	
• Tipo de infracción, jerarquía de la norma infringida (constitucional, legal, reglamentaria o estatutaria), precisión del precepto, denominación y descripción del tipo y conducta analizada.	Artículo 28 Constitucional, párrafo tercero.  Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales aplicables, Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  Puntos: 10.2.2.4.14 de la NOM-005-SCFI-2017.  Puntos: 7.2.5.5 de la NOM-185-SCFI-2017.
• Bien jurídico tutelado, grado de afectación y daño causado, magnitud del riesgo o peligro al que fue expuesto.	Bien jurídico tutelado: el patrimonio (traducida como la afectación al consumidores en su economía y de una colectividad de consumidores cuando en virtud de la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas o por el incumplimiento de normas oficiales mexicanas, se perjudican los derechos de los consumidores en forma generalizada.
• Singularidad o pluralidad de la falta (en la inteligencia de que, con una conducta, se pueden actualizar una o más faltas).	Lo anterior es así, debido a que, <b>CUATRO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, con número de serie 87939D, lados "A", "B", "C" y "D", no cumplen lo referente a la bitácora de eventos de acceso al modo de programación, respecto a las hojas de control presentadas del instrumento</b> , debido a que el personal comisionado, asentó lo siguiente: "Los registros de acceso al modo de programación de la bitácora de eventos (ACMO), no corresponden con hojas de control que al efecto se lleven", transgrediendo con ello lo dispuesto en el punto 7.2.5.5 de la NOM-185-SCFI-2017, y el punto 10.2.2.4.14 de la NOM-005-SCFI-2017.

objeto de verificación, de manera que si existe oposición particular a ello, se incurre en una conducta infractora cuya consecuencia jurídica trae aparejada la imposición de una sanción. Empero, ésta, como todo acto de autoridad, debe fundarse y motivarse con suficiencia, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en términos de los artículos 127 y 132 de la ley citada, es necesario tomar en cuenta, al momento de individualizarla, el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general; el carácter intencional de la infracción; si se trata de reincidencia; y, la condición económica del infractor, a fin de obtener un parámetro de gravedad. De ahí que para obtener el grado de gravedad de la conducta, deben balancearse, por un lado, las condiciones objetivas del evento y, por otro, las subjetivas del infractor, para determinar si aquél es mínimo, medio, máximo o intermedio entre estos parámetros, a fin de que existan correspondencia y proporcionalidad entre la calificación de la conducta y la sanción a imponer, según cada caso en particular.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

• Circunstancias de modo, tiempo y lugar.	Acta Circunstanciada de Visita de Verificación, Expediente: <u>PFC.C.B.1.12/006232-2023</u> , Estación de Servicio <u>PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.</u> ,
• Condiciones externas y medios de ejecución utilizados (contexto fáctico).	
• Reiteración de infracciones (hecho aislado o realización sistemática). <sup>15</sup>	Sin reincidencia
b) Elementos subjetivos.	
• Forma y grado de intervención del infractor.	Conducta Directa dirigida a producir consecuencias negativas. Lo cual implica la participación del infractor, derivada de una conducta a un deber de cuidado recayendo en él, culpa in vigilando por insuficiente vigilancia.
• Comisión dolosa o culposa de la falta (conocimiento, intencionalidad o negligencia).	La conducta omisiva del infractor conlleva el carácter negligente, al no cumplir con su obligación de mantener en buen estado los instrumentos.
• Posibilidad de prever y evitar la conducta y el daño.	Lo anterior en atención a que era un deber de cuidado previsible y no se previó, siendo así que <b><u>CUATRO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, con número de serie 87939D, lados "A" ,"B" "C" y "D", no cumplen lo referente a la bitácora de eventos de acceso al modo de programación, respecto a las hojas de control presentadas del instrumento, debido a que el personal comisionado, asentó lo siguiente: "Los registros de acceso al modo de programación de la bitácora de eventos (ACMO), no corresponden con hojas de control que al efecto se lleven", transgrediendo con ello lo dispuesto en el punto 7.2.5.5 de la NOM-185-SCFI-2017, y el punto 10.2.2.4.14 de la NOM-005-SCFI-2017.</u></b>
• Deber de cuidado derivado de sus propias funciones o actividades (culpa in vigilando). <sup>16</sup>	

Esta autoridad considera que la conducta en la que incurre el infractor es categorizada como **GRAVE**, esto debido a que se parte de una hipótesis en donde un agente, con conocimiento de causa, decide no actuar, y esta omisión trae aparejado un resultado material o formal con resultados jurídicos o legales tal como se expone en lo sucesivo:

De conformidad a lo anterior, la conducta omisa desplegada por el infractor, es objeto de sanción en atención a la aplicación del derecho administrativo sancionador, debido a que la conducta contraviene con la prohibición establecida en la norma, independientemente de que la irregularidad no haya causado un daño directo o material, esta subsiste, así como el riesgo para la vida, salud, seguridad y economía de los consumidores, lo cual no quiere decir que debido a la falta de ese daño material a los consumidores no se deba sancionar al infractor.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> AGUIRRE Saldívar, Enrique, Individualización de las sanciones, Notas para su reflexión, Primera edición, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016, pág. 42.

<sup>16</sup> AGUIRRE Saldívar, Enrique, Individualización de las sanciones, Notas para su reflexión, Primera edición, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016, pág. 42.

<sup>17</sup> Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P./J. 99/2006, del publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, materia Constitucional, Administrativa, p. 1565, del rubro: **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.**





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

A mayor abundamiento del contenido de la fracción V, del artículo 128 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor se aprecia que se considerará grave cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o tarifas establecidos o registrados por la Secretaría o por cualquiera otra autoridad competente.

### E) CONDICIÓN ECONÓMICA DEL INFRACTOR

Siguiendo ese orden, en términos del numeral 89, *fracción V*, del aludido Reglamento, se establece que este requisito consiste en evaluar las posibilidades del infractor para responder a la sanción impuesta de manera tal que sea equitativa y será considerada con base en la información proporcionada por el proveedor y, en su caso, los datos asentados en el acta circunstanciada de visita de verificación. Durante el procedimiento, la Procuraduría podrá solicitar la información o documentación necesaria al presunto infractor, a efecto de determinar su capacidad económica. Dicha capacidad la evaluará la Procuraduría tomando en consideración, entre otras cosas, si se trata de personas físicas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, de conformidad con la clasificación establecida por la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, así como con los acuerdos emitidos por la Secretaría de Economía y, en su caso, los datos asentados.

Por otro lado, es dable resaltar que mediante el multicitado acuerdo de inicio a procedimiento debidamente notificado, se requirió a la visitada remitiera documentos idóneos sobre su condición económica real, a fin de que al momento de que esta Autoridad Federal emitiera la resolución que en derecho corresponda e imponga, en su caso, una sanción de carácter económico consistente en una multa, tal monto sea considerado, **bajo el apercibimiento** que de no hacerlo, esta autoridad federal resolvería con las constancias que obren en el expediente, siendo las siguientes:

- Acta circunstanciada de visita de verificación se desprende que el visitado señaló que el capital en giro de la negociación era de [REDACTED]

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia VI-TASR-XXXIII-17, emitida por el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tomo IV Febrero de 2011, Materia Administrativa, Página: 386, que a la letra dispone:

**"ES VÁLIDO APOYAR EL ELEMENTO INDIVIDUALIZADOR DE LA SANCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR, EN EL CAPITAL ESTIMADO DE ÉSTE EN**

Se testan 7 palabras que engloban a :

1.- Capital en giro: ( 7 palabras);

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Ver motivación en el colofón que se anexa.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

**LAS MULTAS QUE IMPONGA LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL**

**CONSUMIDOR.-** Para cumplir con la exigencia de la debida fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 Constitucional, es válido que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, al imponer las sanciones que en derecho correspondan, considere los elementos previstos en el artículo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre los que se encuentra la capacidad económica del infractor; de tal suerte que si sólo cuenta con el dato del capital en giro, aun y cuando no muestra la condición económica real del infractor, en tanto que esta sólo puede verse reflejada a través de sus utilidades, pérdidas y activos, dicha Procuraduría sí puede considerarlo dato para individualizar la capacidad económica del infractor, debido a que si éste considera que su capacidad económica no se ve reflejada con el dato tomado en cuenta por la autoridad para determinarla, podrá probarlo, por ser quien conoce sus utilidades, pérdidas y activos, aportando los elementos idóneos, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria."

*Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1201/10-11-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de julio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa María Corripio Moreno.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Acosta Alvarado.*

- De acuerdo con el acta de verificación se advierte que la estación de servicio visitada comercializa grandes volúmenes de producto, pues cuenta con **06** instrumentos para el despacho de gasolina menor a 91 octanos y **06** instrumentos para el despacho de gasolina mayor o igual a 91 octanos así como con el equipo necesario para medir y despachar el producto. Adicionalmente, cuenta con **03** tanques de almacenamiento de combustible y una superficie aproximada de **1,218** metros cuadrados.
- Ahora bien, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad debió separar el 5% del total de las utilidades obtenidas en un año, a efecto de generar un fondo de reserva, hasta que el mismo importe la cantidad equivalente a la quinta parte del capital social.
- Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, constituye un hecho notorio, para mejor proveer, respecto a su condición económica, los datos publicados en la página de la Comisión Reguladora de Energía y el permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, con número **PL/8017/EXP/ES/2015**, de donde se desprenden las condiciones con las que debe cumplir la estación de servicio, conforme a foja 01, punto 03, de la "Descripción de la Estación de





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Servicio e Inversión", lo que se corrobora con el siguiente link  
<https://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerPermiso/?id=Y2E1YTIkOTctM2E5ZS00NWZiLTkyNDiNDiZDA2M2FiYmEz> desglosándose lo siguiente:



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

PERMISO DE EXPENDIO DE PETROLÍFEROS EN  
ESTACIONES DE SERVICIO  
Núm. PL/8617/EXP/ES/2015

Este Permiso definitivo de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio autoriza a **PROMOTORA CORCAN S.A. DE C.V.** para expendir **Gasolina Magna, Gasolina Premium** en la estación de servicio de fin específico ubicada en **AV. LAZARO CARDENAS NO. 904, LAZARO CARDENAS, Victoria, 87030, Tamaulipas**, de conformidad con la Resolución Núm. **RES/723/2015** emitida por esta Comisión Reguladora de Energía el **5 de Noviembre de 2015**, mismo que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, y estará sujeto al cumplimiento y observancia de los derechos y las obligaciones establecidos en las siguientes:

CONDICIONES

1. Objeto de Permiso y vigencia	Prestación de servicio de expendio de petrolíferos en una estación de servicio, con una vigencia de 30 años contada a partir del 1 de enero de 2016, y podrá darse por terminada por la actualización de cualquiera de las causas establecidas en el artículo 54 de la LH.
2. Disposiciones Jurídicas Aplicables	La actividad autorizada se sujetará a lo previsto en la LORCME, la LH, el Reglamento, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y su Reglamento, a las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos, así como a las demás normas que por su propia naturaleza le sean aplicables.
3. Descripción de la Estación de Servicio e inversión.	La estación de servicio es del tipo "fin específico" y cuenta con 3 módulos despachadores para la entrega de <b>Gasolina Magna, Gasolina Premium</b> . La estación de servicio considera una inversión aproximada de [REDACTED] La estación de servicio cuenta con instrumentos de telemetración [REDACTED] 2
4. Inicio de operaciones, y	La estación de servicio inició operaciones el <b>18 de Junio de 2012</b> y tiene

De ahí que, la información publicada en la página de internet referida, constituya datos indubitables o hechos notorios de la estación de servicio denominada "**PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**," sobre su capacidad económica en estudio.

En consecuencia, se tiene como suficiente la capacidad económica de la empresa en caso de imponérsele una sanción, aunado a ello, se consideran los elementos antes señalados: I. Superficie aproximada de **1,218** metros cuadrados; II. **12** instrumentos de medición y; III. **3** tanques de almacenamiento de combustible, equivalente a **120,000** litros de combustible<sup>18</sup>.

Por lo que es evidente que cuenta con los recursos para la adquisición y venta de combustible. Sumado a lo anterior, el visitado señaló en la visita de verificación que el capital en giro de la negociación era la suma [REDACTED] 1

Ahora bien, a efecto de generar un fondo de reserva hasta que el mismo importe la cantidad equivalente a la quinta parte del capital social; y por último, del permiso otorgado por la

<sup>18</sup> [http://www.pemex.com/franquicia/incorporacion-operacion/Documents/EspTec2006Almacenamiento.pdf0\\$.pdf](http://www.pemex.com/franquicia/incorporacion-operacion/Documents/EspTec2006Almacenamiento.pdf0$.pdf)

Se testan 8 palabras que engloban a:

2.- Inversión aproximada: (1 palabra) y

1.-Capital en giro (7 palabras);

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Ver motivación en el colofón que se anexa.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Comisión Reguladora de Energía (CRE), se observa que la estación de servicio considera una inversión aproximada de [REDACTED]

2

En ese sentido, todo indica que la estación de servicio goza de la capacidad económica suficiente para hacer frente a la sanción económica, que por medio de la presente, se le imponga con motivo de la infracción a las normas anteriormente invocadas.

### SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA GRADUACIÓN DE LA MULTA

1. Con fundamento en el artículo 131 fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ella, serán impuestas indistintamente con base en **las actas levantadas por la autoridad**, y toda vez que, como se ha establecido en la presente resolución han sido estudiadas de forma pormenorizada las infracciones cometidas y su adecuación a las normas aplicables, confirmando que en el caso concreto se configuran dichas hipótesis normativas, se procede la individualización de la sanción consistente en multa a fin de determinar el monto de la misma en una cuantía específica.

2. No es óbice a lo anterior, que esta autoridad determinará la sanción, considerando como base la gravedad de la infracción tomando en cuenta **a) el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general, b) el carácter intencional de la infracción c) reincidencia y d) la condición económica del infractor** elementos que esta autoridad ha estudiado y evaluado puntualmente en el apartado que precede atendiendo al contenido del artículo 132 de la Ley de la materia.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Tesis I.3o.A.11 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 30, mayo de 2016, Tomo IV, localizable en la página 2929, cuya voz y cuyo texto son es tenor literal siguiente: **"SANCIONES IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR POR OPOSICIÓN A SUS FACULTADES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN. REGLAS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN.** De acuerdo con los artículos 13 y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la procuraduría federal especializada en esa materia, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones del propio ordenamiento, tiene la facultad de vigilar y verificar, a través de visitas, monitoreos o por cualquier otro medio, los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito, por lo que los proveedores, sus representantes o empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría Federal del Consumidor, el acceso al lugar o lugares objeto de verificación, de manera que si existe oposición particular a ello, se incurre en una conducta infractora cuya consecuencia jurídica trae aparejada la imposición de una sanción. Empero, ésta, como todo acto de autoridad, debe fundarse y motivarse con suficiencia, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en términos de los artículos 127 y 132 de la ley citada, es necesario tomar en cuenta, al momento de individualizarla, el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general; el carácter intencional de la infracción; si se trata de reincidencia; y, la condición económica del infractor, a fin de obtener un parámetro de gravedad. De ahí que para obtener el grado de gravedad de la conducta, deben balancearse, por un lado, las condiciones objetivas del evento y, por otro, las subjetivas del infractor, para determinar si aquél es mínimo, medio, máximo o intermedio entre estos parámetros, a fin de que exista correspondencia y proporcionalidad entre la calificación de la conducta y la sanción a imponer, según cada caso en particular."

Se testan 8 palabras que engloban a:

1.- Inversión aproximada: (8 palabras);

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Ver motivación en el colofón que se anexa.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

72

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

3. Dilucidado lo anterior, de conformidad con los artículos 24, fracción XIX y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 3° fracciones X y XII, 4° fracción VI de la Ley de Infraestructura de la Calidad <sup>20</sup> esta autoridad es competente para verificar, vigilar, y aplicar sanciones establecidas en dichos ordenamientos.

Es imperioso referir textualmente de los preceptos normativos referidos:

#### Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 24.- La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

(...)

XIX. Aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

(...)"

[Énfasis añadido]

"Artículo 96.- La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.<sup>21</sup> "

[Énfasis añadido]

#### Ley de Infraestructura de la Calidad

Artículo 3. Las Autoridades Normalizadoras están obligadas a procurar políticas públicas que contribuyan a la modernización del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a impulsar una adecuada infraestructura de la calidad que permita estimular el crecimiento de la industria, así como a la consecución de los diversos objetivos legítimos de interés público previstos en esta Ley. Además de las facultades expresamente conferidas en la presente Ley y en su Reglamento, las Autoridades Normalizadoras cuentan con las siguientes atribuciones:

(...)

X. Realizar Verificaciones para comprobar que los bienes, productos, procesos y servicios cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas de su competencia, llevar a cabo la Vigilancia de las Entidades de Acreditación y Organismos de Evaluación de la Conformidad, así como la vigilancia de los mercados que sean materia de las Normas Oficiales Mexicanas de su competencia y, en su caso, de los Estándares cuando proceda;

(...)

XII. Sin perjuicio de lo señalado por la legislación aplicable a cada una de las Autoridades Normalizadoras, en el ámbito de sus respectivas competencias, imponer cualesquiera de las sanciones a que se refieren los artículos 154, 155 y 156 de la presente Ley;

(...)

[Énfasis añadido]

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

<sup>20</sup> Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2020.

<sup>21</sup> Es menester precisar que en términos del artículo noveno transitorio de la Ley de Infraestructura de la Calidad "Las referencias que, en otras leyes y demás disposiciones jurídicas (...) se realicen a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización por lo que hace a cuestiones sobre normalización, evaluación de la conformidad y metrología, se entenderán a los referidos en la Ley de Infraestructura de la Calidad."





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

(...)

VI. Autoridad Normalizadora: a las dependencias o entidades competentes de la Administración Pública Federal que tengan atribuciones o facultades expresas para realizar actividades de normalización y estandarización.

(...)

[Énfasis añadido]

4. En efecto, para la individualización e imposición del importe de una multa por el incumplimiento de la Normas Oficiales Mexicanas reguladoras del expendio de gasolina y otros combustibles líquidos, esta autoridad debe de contemplar los parámetros, previstos en los artículos 154, fracción II y 155, fracción II, inciso d), de la Ley de Infraestructura de la Calidad, atento a que establecen una cantidad mínima y otra máxima, como base para razonar la imposición del monto de la multa, correspondiente al incumplimiento de la estación de servicio al orden jurídico, regulador del servicio autorizado.

Preceptos que son del tenor siguiente:

*"Artículo 154. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables por los incumplimientos a esta Ley y a las disposiciones que emanen de ella serán las siguientes:*

*(...)*

*II. Multa:*

*(...)"*

[Énfasis añadido]

*Artículo 155. Se sancionarán con multa las siguientes acciones u omisiones:*

*(...)*

*II. De seiscientas a nueve mil veces el equivalente en Unidades de Medida y Actualización, cuando:*

*(...)*

*d) Se contravengan disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas y Estándares que resulten obligatorios,*

*(...)"*

[Énfasis añadido]

5. En ese sentido, esta autoridad goza del arbitrio en la individualización del importe de la multa a imponer a la estación de servicio, misma que no tendrá el carácter de excesiva, toda vez que ésta no se fijará con base en una cantidad fija, sino dentro de parámetros correspondientes a las sanciones prescritas por la ley, cuya aplicación debe ser dentro de los límites de la misma, sin trastocar los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad para su imposición, en términos del artículo 22 constitucional.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Cobra aplicación, en lo particular, el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:<sup>22</sup>

**"MULTAS.- LA AUTORIDAD TIENE ARBITRIO PARA FIJAR SU MONTO CUANDO LA LEY SEÑALA EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO DE LAS MISMAS.-** Siempre que una disposición legal señala el mínimo y el máximo de una multa que debe aplicarse a determinada infracción, la autoridad goza de arbitrio para fijar el monto de la misma y al imponer la sanción que corresponda, tomara en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del causante y conveniencia de destruir placas establecidas, estas circunstancias constituyen lineamientos genéricos que la autoridad no debe ignorar, pero que habrá que adecuar al caso concreto, tomando en consideración las circunstancias peculiares específicas de este, que pueden comprender otros elementos no mencionados explícitamente en la Ley de referencia, ya que la intención del legislador no es la de convertir la aplicación de sanciones en una facultad regulada, si no por dar una pauta de carácter general que la autoridad debe seguir a fin de que la sanción que imponga esté debidamente motivada."

6. Se dice lo anterior, toda vez que el poder punitivo de la administración pública debe ejercerse bajo parámetros de legalidad, a efecto de que se respete la garantía constitucional que prohíbe las multas excesivas, tomando a consideración la gravedad de la infracción cometida, el grado de responsabilidad en la conducta omitida o prohibida y la condición económica del infractor. De esta forma, se evita la imposición de sanciones pecuniarias desproporcionadas que contraríen el artículo 22 de la Norma Fundante.

A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1802/2003 esgrimió las siguientes consideraciones:

▪ "Entonces, puede concluirse que, por lo que toca a la ley, una multa será considerada excesiva y, por lo tanto, inconstitucional, cuando se fije como tal una cantidad invariable y en su imposición, por lo tanto, no se pueda tomar en consideración la gravedad de la infracción realizada, los perjuicios ocasionados a la colectividad y la reincidencia en la comisión del hecho que la motiva, todo ello en relación con la capacidad económica del infractor."

▪ "La única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, que contraríen al artículo 22 constitucional, ha dicho esta Suprema Corte de Justicia, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, así como la libertad de imponer las sanciones que considere justas, dentro de un mínimo y un máximo."

▪ "Por lo que debe concluirse que todas aquellas leyes o preceptos legales que concedan a las autoridades esas facultades, aunque sea implícitamente, respetan la garantía contenida en el artículo 22 de la Ley Suprema."

▪ "Consecuentemente, se aprecia que dicha multa, al contemplar dos parámetros, uno mínimo y uno máximo para la imposición de la sanción, de ninguna manera atenta contra la garantía prevista por el artículo 22 Constitucional, no reuniendo, por ende, los requisitos para ser considerada excesiva."

En mérito de lo anterior, basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues

<sup>22</sup> Tesis de jurisprudencia publicada en la página 421 de la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, número 71, correspondiente al mes de noviembre de 1985.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable.<sup>23</sup>

7. Por lo anteriormente expuesto, y dado que quedó acreditada la infracción cometida por la estación de servicio visitada específicamente se detectó que:

**CUATRO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, con número de serie 87939D, lados "A", "B", "C" y "D", no cumplen lo referente a la bitácora de eventos de acceso al modo de programación, respecto a las hojas de control presentadas del instrumento,** debido a que el personal comisionado, asentó lo siguiente: "Los registros de acceso al modo de programación de la bitácora de eventos (**ACMO**), no corresponden con hojas de control que al efecto se lleven", transgrediendo con ello lo dispuesto en el punto 7.2.5.5 de la NOM-185-SCFI-2017, y el punto 10.2.2.4.14 de la NOM-005-SCFI-2017.

8. Por lo que se procede a la individualización e imposición de una sanción consistente en **multa** la cual no se considera excesiva dado que la misma no es fija ni invariable pues se considera en **primer término** los parámetros que estableció el Legislador en los artículos 154, fracción II y 155, fracción II, inciso d) de la Ley de Infraestructura de la Calidad cuando por acciones u omisiones **SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y ESTÁNDARES QUE RESULTEN OBLIGATORIOS** determinando que dicha conducta será sancionadas con multa de:

A) **De 600 veces** el equivalente en Unidades de Medida y Actualización, (**multa mínima**).

B) **Hasta 9000 veces** el equivalente en Unidades de Medida y Actualización (**multa máxima**).

Por consiguiente, esta autoridad se basa en las técnicas garantistas del derecho penal debido a su aplicabilidad en el derecho administrativo sancionador, para determinar el la graduación de la multa a imponer, dado que el procedimiento que nos ocupa deriva de una norma inmersa en un

<sup>23</sup> Tesis VI.3o.A. J/20 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época 186 216 35 de 70, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.XVI, agosto de 2002, Pág. 1172, Jurisprudencia (Común), [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Agosto de 2002; Pág. 1172, de rubro y texto siguiente: "**MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO.** - Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable."





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones:

- A) Que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y,
- B) Que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el

orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considere administrativamente ilícita.<sup>24</sup>

9. En **segundo término**, como se ha puesto en evidencia la multa prevista por la Ley descrita, descansa sobre el andamiaje constitucional al no establecer una cantidad invariable, por el contrario para su imposición se consideran parámetros de individualización que remiten esencialmente a las características del infractor no en términos de realizar distinciones discrecionales o que constituyan categorías sospechosas, sino evaluar su capacidad económica la cual consiste en las posibilidades del infractor para responder a la sanción impuesta de manera tal que sea equitativa, y con base en la información proporcionada por el proveedor y, en su caso, los datos asentados en el acta circunstanciada de visita de verificación.

<sup>24</sup> En ese sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 124/2018 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 60, Noviembre de 2018, materia administrativa, p. 897, de rubro y texto siguiente: **NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.**- En la jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que resulten aplicables las técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que se considere administrativamente ilícita. Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción, sino que se requiere de manera concurrente que su despliegue entrañe una manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el procedimiento tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con los procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los servidores públicos.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

En este sentido, y bajo las directrices antes descritas, se determina imponer una multa equivalente a **650 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMAS), POR CADA INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CON IRREGULARIDAD**, multa que se encuentra **LEVEMENTE SUPERIOR AL MONTO MÍNIMO** que establece la Ley de Infraestructura de la Calidad; unidad cuyo valor corresponde a la cantidad de **\$103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.)**, monto vigente al momento de la comisión de la infracción, en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2023 cuya vigencia surtió efectos a partir del 01 de febrero del mismo año.

10. Por tanto, al ser detectados **CUATRO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN** que y bajo la estricta aplicación de los cálculos antes establecidos el importe de la multa corresponde a: **\$269,724.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)**. Esto es así, atento a que se consideraron disposiciones de carácter general que determinan la aplicación de una sanción a determinadas infracciones administrativas, las cuales fueron detectadas en la visita de verificación referida, en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 158 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en clara referencia a que si la infracción es por el uso de varios instrumentos para medir, la multa se computará en relación con cada uno de ellos.

Preceptos de contenido siguiente:

"Artículo 77.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente así como el monto total de todas ellas."

"Artículo 158. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, las multas se determinarán separadamente y, por la suma resultante de todas ellas, se expedirá la resolución respectiva.

También cuando en una misma acta se comprendan dos o más infracciones, a cada uno de ellos se impondrá la sanción que proceda. Si el infractor no intervino en la diligencia se le dará vista del acta por el término de diez días, transcurrido el cual, si no desvirtúa la infracción, se le impondrá la sanción correspondiente.

Cuando el motivo de una infracción sea el uso de varios instrumentos para medir, la multa se computará en relación con cada uno de ellos y si hay varias prevenciones infringidas también se determinarán por separado."

[Énfasis añadido]

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se:

## RESUELVE

**PRIMERO.** La estación de servicio con número de permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio **PL/8017/EXP/ES/2015**, denominada **PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**, infringió I. Ley Federal de Protección al Consumidor, II. Ley de Infraestructura de la





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

Calidad, III. NOM-005-SCFI-2017 y IV. NOM-185-SCFI-2017, de acuerdo con las consideraciones establecidas en la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se impone a la estación de servicio con número de permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio **PL/8017/EXP/ES/2015** denominada **PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**, con domicilio ubicado **AV. LAZARO CARDENAS NO. 904, LAZARO CARDENAS, 87030, VICTORIA, TAMAULIPAS**, la sanción consistente en multa por la cantidad de **\$269,724.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)**. En los términos precisados en los considerandos y resultandos de esta resolución.

**TERCERO.** El pago de la sanción deberá efectuarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, a través del esquema de pago e5cinco, mediante transferencia electrónica o ventanilla bancaria, presentando la hoja de ayuda correspondiente, misma que podrá obtener en el portal electrónico de Profeco [www.profeco.gob.mx](http://www.profeco.gob.mx), debiendo exhibir original y entregar copia del comprobante de pago ante esta autoridad, en un plazo de cinco días hábiles posteriores al pago de la multa, en caso contrario se girará oficio a la **Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución, de esta Procuraduría** para efecto de que inicie el procedimiento administrativo de ejecución **en su carácter de autoridad fiscal bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.**

**CUARTO.** En términos del artículo 134 BIS último párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, **al pagar la multa impuesta dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, se aplicará una reducción de un cincuenta por ciento de su monto,** siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa.

**QUINTO.-** Dígase a la estación de servicio, que el pago de la multa impuesta, podrá realizarlo a través del portal de Internet <http://e5cinco.profeco.gob.mx> ingresando al menú principal, seleccionando la "Lista de trámites y servicios", posteriormente elegir la pestaña "Verificación de Combustibles", requisitando los datos de la estación según sea el caso (persona física o moral), para generar la hoja de ayuda para el pago mediante ventanilla bancaria o transferencia electrónica, debiéndose exhibir y entregar copia u original del comprobante de pago ante esta autoridad, apercibida que, de no hacerlo así, se turnará para procedimiento de ejecución.





PROCURADURÍA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA  
CONFIANZA DE COMBUSTIBLES  
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.12/006232-2023

**SEXTO.** Se apercibe al visitado que en caso de incurrir nuevamente en las mismas anomalías, se impondrán las multas establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del mismo ordenamiento.

**SÉPTIMO.** En términos de los artículos 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 83 y 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, cuenta con 15 días hábiles para presentar recurso de revisión ante esta Procuraduría Federal del Consumidor, sita en José Vasconcelos número 208, Colonia Condesa, Código Postal 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

**OCTAVO.** Notifíquese **personalmente** la presente resolución en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por la estación de servicio con número de permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio **PL/8017/EXP/ES/2015**, denominada **PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V.**, ubicado en: **AV. LAZARO CARDENAS NO. 904, LAZARO CARDENAS, 87030, VICTORIA, TAMAULIPAS**, con fundamento en los artículos 104 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 28, 30, 36 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, habilitándose para la notificación de la presente, días y horas inhábiles.

Así lo resolvió y firma la **LICENCIADA JESSICA ALEJANDRA GUERRERO GUTIÉRREZ, DIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS** de la **DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA DE COMBUSTIBLES** de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor con fundamento en los artículos 1° y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, fracciones I, II, XIX, 27, fracciones I, II, III, VIII, IX y X y 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1°, 3°, 4°, párrafos primero fracciones III y XV, párrafos segundo y tercero, 18, párrafos primero, segundo fracciones IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII y párrafo tercero, 19, 27, fracciones V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XV y XVI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; de conformidad con el numeral **QUINTO** tercer párrafo del **"Acuerdo por el que se Delegan a Diversos Servidores Públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, las Facultades que se Indican"** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021, 1°, 4° y 7° fracción II inciso A) y 12 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor (vigentes).

Elaboró: Lcda. Alejandra Jazmin Reyes Aguilar  
Revisó: Lcdo. Jesus Chapa Rosales  
Vo. Bo. Lcda. Diana González Gómez